

1. Juventudes en contextos de violencia estructural: hacia una comprensión situada de la violencia escolar

LUZ MARINA IBARRA URIBE*
CÉSAR DARÍO FONSECA BAUTISTA**



<https://doi.org/10.52501/cc.335.01>

Introducción

Este capítulo ofrece un panorama integral sobre la violencia estructural en México y su impacto en la vida de adolescentes y jóvenes, con énfasis en las consecuencias que esta realidad tiene en los espacios educativos. A partir de una revisión de datos oficiales, estudios recientes y análisis críticos, se contextualiza el fenómeno de la violencia escolar en el marco de profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales que afectan al país desde hace ya casi dos décadas.

El capítulo también introduce la estrategia metodológica que sustenta la investigación presentada en los capítulos siguientes, desarrollada por un equipo interinstitucional de docentes e investigadores en planteles de educación media superior ubicados en los estados de Morelos, Aguascalientes y Chiapas. Al articular el análisis estructural con una mirada situada en el ámbito escolar, este capítulo busca ofrecer claves para comprender la complejidad de las violencias escolares desde una perspectiva crítica, territorial y centrada en las juventudes.

En este contexto de creciente precariedad social, es indispensable remontarse al periodo en que la violencia adquirió una nueva dimensión en

* Doctora en Educación. Profesora-investigadora de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0808-5518>

** Doctor en Educación. Docente-investigador del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios núm. 76 (CBTis No. 76), Morelos, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5308-1295>

el país. Desde el año 2006, México ha experimentado un aumento significativo en los niveles de violencia social, marcado por la implementación de la “guerra contra el narcotráfico” bajo el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.¹ Esta estrategia —que buscaba combatir frontalmente a los cárteles de la droga mediante el despliegue de las fuerzas armadas— desencadenó una escalada de conflictos que impactó y continúa afectando profundamente a la sociedad mexicana. Esto se observa no sólo en el número de enfrentamientos entre autoridades y organizaciones criminales, sino también en las dinámicas sociales que han perpetuado y diversificado la violencia en múltiples niveles.

El incremento de la violencia social en México no puede entenderse sin considerar las profundas desigualdades económicas, la exclusión social y la corrupción institucional que caracterizan al país. Este fenómeno, catalizado por la declaración de la “guerra contra el narcotráfico”, ha tenido efectos devastadores en múltiples aspectos de la vida nacional, como la seguridad, la economía, las relaciones comunitarias y la percepción del Estado como garante de la justicia.

El despliegue militar y policiaco, acompañado de operativos de alto impacto contra líderes de cárteles del narcotráfico, exacerbó los niveles de violencia; en lugar de debilitar a las organizaciones criminales, estas se fragmentaron en grupos más pequeños y menos predecibles, lo que generó un aumento en la competencia por el control territorial. Así, la violencia dejó de ser exclusiva del narcotráfico y se manifestó en fenómenos como el incremento de homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones y feminicidios, afectando a distintos sectores de la sociedad.

Causas estructurales: el caldo de cultivo de la violencia

El fenómeno de la violencia en México debe entenderse en el marco de las profundas desigualdades estructurales, la extendida corrupción institucio-

¹ Danier Chávez Jiménez y Rubén Darío Ramírez Sánchez, “Las violencias en México, fenómeno en expansión (2006-2022)”, *Inventio*, vol. 19, núm. 48, 2023, doi: <http://doi.org/inventio/10.30973/2023.19.48/2>, consultado en enero de 2025.

nal y la impunidad sistemática. Entre las principales causas se encuentran la desigualdad social y económica. Cabe mencionar que México figura entre los países de América Latina con mayores niveles de desigualdad. Amplios sectores de la población carecen de acceso a servicios fundamentales como educación de calidad, atención médica, vivienda digna y oportunidades laborales. Este contexto propicia que los jóvenes se incorporen a actividades delictivas como estrategia de supervivencia en contextos donde el Estado está ausente o es percibido como incapaz de garantizar derechos.

La corrupción institucional —mediante la colusión entre autoridades y organizaciones del crimen organizado— ha minado la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia y seguridad. Diversos informes han documentado el involucramiento de policías, ministerios públicos e incluso actores del poder judicial en redes de corrupción que perpetúan la impunidad. Según datos de *México Evalúa*,² en 2023 apenas 7 de cada 100 casos que ingresaron a las fiscalías estatales obtuvieron una resolución, lo que implica que más del 90% de los delitos quedaron sin resolver. Esta situación alimenta la percepción generalizada de desprotección ciudadana y de la ineficacia del Estado, como resultado de muchos casos, la ciudadanía opte por hacer justicia por mano propia, lo que, a su vez, agrava el ciclo de violencia.

Es importante señalar que la violencia en México no se limita a los enfrentamientos entre el Estado y los cárteles. Sus manifestaciones son múltiples y sus efectos varían entre los diversos sectores de la población. Entre las expresiones más visibles destacan:

- Homicidios. Se observan aumentos y estancamientos preocupantes en algunos estados. Las entidades con mayores incrementos de 2022 a 2023 son Morelos, Chiapas y Guerrero. Por otro lado, en algunos estados la violencia letal no varía significativamente ni logra bajar de determinado nivel de homicidios. De enero a junio de 2024, la organización México Unido Contra la Delincuencia, reporta que la tasa de homicidios en el país fue de 11.7 por cada 100 mil habitantes. En

² Alejandra Hernández, "La impunidad en México permanece por encima del 90%: Hallazgos 2023", *Evalúa*, México, 2024. <https://www.mexicoevalua.org/la-impunidad-en-mexico-permanece-por-encima-del-90-hallazgos-2023/>, consultado en enero de 2025.

este periodo, el 73% de los homicidios se cometieron con arma de fuego.³ Según otras fuentes,⁴ México cerró 2024 con un total de 30 057 homicidios dolosos, un incremento interanual del 1.2%; es decir, a 344 casos más respecto a los 29 713 registrados en 2023, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta cifra representa un promedio de aproximadamente 70 asesinatos diarios. Además, durante 2024, se registraron 6 837 asesinatos de mujeres en México, lo que equivale a un promedio de 18.7 homicidios por día. De este total, 839 fueron clasificados como feminicidios. El INEGI aún no publica un reporte final correspondiente a ese periodo.

- Desapariciones forzadas. La crisis de desapariciones continúa profundizándose. En 2023 se registraron 10 283 personas desaparecidas, cifra que aumentó a 13 627 en 2024, lo que representa un incremento del 32%. Esto equivale a un promedio diario de 37 personas desaparecidas, incluyendo aproximadamente 10 mujeres, adolescentes y niñas cada 24 horas. Desde 2006 hasta 2024, se han identificado cerca de 5 600 fosas clandestinas en el país, lo cual revela la magnitud de esta tragedia.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPdNO), entre 2006 y 2024 se han registrado 116 294 personas desaparecidas, de las cuales el 97% corresponden al periodo posterior al inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.⁵ Estas cifras no solo muestran una crisis humanitaria, sino que también evidencian el profundo impacto de la violencia en la vida social y política del país.

El impacto de esta violencia es multidimensional; más allá de las pérdidas humanas, ha producido una ruptura en el tejido comunitario, erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y causado un clima gene-

³ México Unidos Contra la Delincuencia, *Atlas de Homicidios en México 2023: perspectiva local, una vía para la paz*. <https://goo.su/VznQ9>, consultado en noviembre de 2024.

⁴ Telemundosanantonio.com, “Hubo más de 30 000 asesinatos en México durante 2024”, Publicado el 18 de enero del 2025, <https://goo.su/UrWr8>, consultado en noviembre de 2024.

⁵ Secretaría de Gobernación, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, versión estadística. <https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral>, consultado en enero de 2025.

ralizado de miedo e incertidumbre. La militarización de la seguridad pública, lejos de resolver estos problemas, ha sido señalada como una de las fuentes de violaciones a los derechos humanos —que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura—, debilitando aún más la legitimidad del Estado.

Uno de los sectores más afectados por esta crisis es la población joven. Desde 2006, generaciones enteras han crecido en un entorno marcado por la inseguridad, la violencia y la falta de oportunidades, lo que ha impactado profundamente su desarrollo emocional y sus aspiraciones de vida. Además, la violencia ha vulnerado su derecho a la seguridad, convirtiéndolos en víctimas de desapariciones forzadas, reclutamiento por grupos delictivos y agresiones dentro y fuera de los espacios escolares. Esta crisis no solo afecta a la juventud a nivel individual, sino que compromete el tejido social y el desarrollo del país, ya que la incertidumbre y el miedo condicionan sus decisiones y restringen su capacidad de participación en la vida comunitaria.

Los datos del INEGI,⁶ muestran que entre 2006 y 2018 se registraron 325 699 homicidios, de los cuales 23 420 fueron hombres menores de 19 años (alrededor del 7% del total) y 6 022 mujeres menores de 19 años (casi el 2%). Aunque México no ha sido declarado formalmente en guerra, las condiciones cotidianas que viven muchas comunidades —especialmente aquellas con presencia del crimen organizado— han sido equiparables a las de un conflicto armado interno, en el que menores de edad son utilizados como combatientes, informantes o ejecutores.⁷

En este contexto, las estimaciones sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas reflejan la dimensión del problema. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) estimó en 2011 que al menos 35 000 menores formaban parte de grupos delictivos. En 2018, autoridades federales calcularon que eran aproximadamente 460 000, revelando la existencia de un gran vacío de información oficial y la falta de políticas efectivas de prevención y protección.⁸ Esta situación se agrava en

⁶ INEGI, *Estadísticas de defunciones registradas en México*, 2018, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020, <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/DH/DH2022.pdf>, consultado en diciembre de 2024.

⁷ Reinserta.org, *Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada*, p.29, <https://goo.su/nJgRA> consultado en diciembre de 2024.

⁸ *Ibid.*, p. 7

regiones de alta conflictividad, donde la presencia del Estado es limitada o inexistente.

La falta de entornos seguros y el avance del crimen en territorios escolares y comunitarios han hecho del acceso a la educación un desafío creciente para miles de jóvenes. A esto se suma el abandono estructural del sistema educativo en zonas marginadas, lo que profundiza las condiciones que reproducen la exclusión y la violencia.

Impacto en la educación

La violencia generalizada ha impactado de forma significativa el sistema educativo en México, especialmente en zonas de alto riesgo donde los enfrentamientos armados, el narcotráfico o la presencia de grupos delictivos han provocado el cierre temporal o definitivo de planteles escolares. En muchos casos, los estudiantes han abandonado la escuela por temor a ser víctimas de secuestros, enfrentamientos o reclutamiento forzado. Esta situación ha contribuido al aumento de las cifras de deserción escolar en distintas entidades desde 2006.

Incluso en contextos en los que las escuelas permanecen abiertas, la inseguridad genera un ambiente hostil que repercute negativamente en el rendimiento académico, la salud emocional de los estudiantes y la calidad de la interacción social dentro del aula. Casos de acoso escolar, amenazas, extorsiones, o la presencia de armas entre estudiantes se han reportado con creciente frecuencia, en paralelo con la normalización de actitudes violentas como forma de resolución de conflictos.

En regiones afectadas por la violencia, los recursos públicos suelen desviarse hacia operativos de seguridad, dejando a las instituciones educativas en condiciones precarias: escaso personal, infraestructura deteriorada y limitada capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. Este abandono institucional refuerza la sensación de vulnerabilidad y desprotección entre estudiantes, docentes y familias, y limita las posibilidades de construir una educación inclusiva, crítica y transformadora.

Efectos emocionales y psicológicos

La exposición constante a la violencia social ha generado efectos psicológicos significativos entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Diversos estudios coinciden en que han incrementado los casos de ansiedad, depresión y estrés postraumático, así como los comportamientos agresivos, en los contextos marcados por la inseguridad cotidiana. La infancia y la adolescencia son etapas cruciales en el desarrollo emocional, y cuando están atravesadas por la violencia, se ven seriamente comprometidas.

Quienes crecen en entornos inseguros suelen desarrollar una percepción distorsionada de la normalidad, en la que la violencia deja de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje cotidiano. La pérdida de confianza en el futuro, provocada por la falta de oportunidades o el temor constante a ser víctimas, impacta directamente en sus proyectos de vida y reduce sus aspiraciones educativas y profesionales.

La desestructuración del núcleo familiar es otro efecto frecuente. La muerte o desaparición de figuras parentales ha dejado a miles de jóvenes en situación de orfandad, con consecuencias emocionales, económicas y sociales duraderas. Las redes de apoyo comunitario, que tradicionalmente funcionaban como contención ante las crisis, también han sido erosionadas por la desconfianza mutua, el miedo y el aislamiento forzado. Este debilitamiento del tejido social impide la construcción de vínculos afectivos sanos y el surgimiento de espacios de solidaridad.

Otro fenómeno preocupante es la normalización de la violencia como una forma de relacionarse en sociedad. Ante la ausencia de justicia y los niveles alarmantes de impunidad, muchos jóvenes asumen que las leyes no se aplican o que el castigo depende del poder que se tenga, no del delito cometido. Esta percepción causa actitudes cínicas frente a las autoridades y el sistema de justicia, y puede alimentar el uso de la violencia como mecanismo legítimo para resolver disputas o ejercer control.

Además, los jóvenes que viven en contextos violentos enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos formales, lo que refuerza la desigualdad estructural y aumenta el riesgo de que se involucren en economías ilegales como medio de subsistencia. De igual manera, muchas y muchos

optan por migrar —dentro o fuera del país— en busca de seguridad o mejores oportunidades, lo que tiene como resultado la fuga de talentos y el debilitamiento del potencial social de comunidades enteras.

Pese a este panorama adverso, es importante reconocer las múltiples formas de resiliencia que las juventudes han desarrollado, en distintas regiones del país, han protagonizado movimientos sociales, protestas y proyectos comunitarios orientados a la defensa de derechos, la reconstrucción del tejido social y la promoción de la paz. Tal es el caso de la movilización feminista, pues ha sido liderada en gran medida por mujeres jóvenes que denuncian la violencia de género y los feminicidios — con lo que visibilizan problemáticas estructurales—, y exigen transformaciones profundas.

La violencia social en México representa uno de los mayores retos de su historia reciente —las cifras son alarmantes—; sin embargo, es importante no perder de vista los esfuerzos de miles de ciudadanos, organizaciones y colectivos que trabajan día a día para transformar esta realidad. Lograr un México más justo y seguro es una tarea compleja, pero no imposible, siempre y cuando se prioricen políticas públicas integrales y se fortalezcan las bases de la justicia y la equidad social, atacando la impunidad.

Figura 1.1. *Efectos emocionales y psicológicos de la violencia social*



Fuente: elaboración propia.

Hacia una estrategia integral para la prevención y erradicación de la violencia en México

Más allá de las cifras que documentan el número de víctimas, la violencia en México deja impactos profundos en múltiples dimensiones; como la emocional, educativa, económica, comunitaria y cultural. Estos no solo afectan a individuos, sino que perpetúan ciclos estructurales de pobreza, exclusión y desesperanza, especialmente entre los sectores más jóvenes de la población.

En este contexto, atender la violencia no puede limitarse a su contención mediante estrategias de seguridad o políticas punitivas: se requiere una perspectiva integral que articule derechos, equidad y justicia. Es indispensable implementar políticas públicas que garanticen el acceso a una educación de calidad, empleo digno, servicios básicos y entornos seguros que permitan el pleno desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Hasta ahora, muchas de las políticas de prevención han operado bajo un enfoque disuasivo, centrado en el aumento de penas y la criminalización de la pobreza; sin embargo, la evidencia muestra que la amenaza de castigo no basta si no se garantiza el cumplimiento efectivo de la ley. La impunidad mina la credibilidad del sistema y permite que la violencia se reproduzca. Por ello, además de recursos materiales y humanos, es imprescindible una coordinación real entre las instituciones responsables de la seguridad de la población, la procuración de justicia y la defensa de los derechos humanos.

La participación social también es clave: es urgente reconocer el papel que la ciudadanía desempeña, ya sea en la perpetuación o en la transformación de la violencia. La normalización de la violencia —que se expresa en la resignación frente a los homicidios, secuestros, extorsiones y agresiones cotidianas— ha debilitado los lazos comunitarios y generado un ambiente de apatía social. Este proceso de desensibilización disminuye el sentido de colectividad, erosiona la solidaridad y perpetúa un ciclo de indiferencia.

En este entramado, la cultura cumple un rol determinante. La representación mediática de la violencia, la apología del delito y la exaltación de figuras criminales en la música, el cine o las redes sociales, influyen especialmente en los jóvenes, moldeando imaginarios que naturalizan o incluso glamurizan la violencia como medio de poder o ascenso social.

Por su parte, el sistema educativo enfrenta el reto urgente de convertirse en el espacio formador de una ciudadanía capaz de promover valores como el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. No obstante, su capacidad para cumplir con esta función se ve limitada por múltiples desafíos: la insuficiencia presupuestal, la corrupción, las carencias estructurales y el abandono institucional. Estos factores no solo obstaculizan el desarrollo de competencias académicas, sino también la construcción de capacidades críticas y de agencia transformadora en las y los estudiantes.

La desigualdad económica sigue siendo un factor determinante en la reproducción de la violencia, particularmente en comunidades en las que la falta de acceso a derechos básicos empuja a miles de jóvenes hacia esquemas de subsistencia vinculados al crimen organizado. Estas trayectorias no son decisiones individuales, sino el resultado de un sistema que excluye precariza y castiga a quienes nacen en contextos de marginación.

Frente a esta realidad, desarticular la violencia exige un esfuerzo colectivo y sostenido que involucre a todos los sectores de la sociedad. Las familias juegan un rol esencial en la transmisión de valores, pero no pueden hacerlo solas: es urgente fortalecer la cultura de la legalidad, fomentar la denuncia, construir confianza en las instituciones y asumir responsabilidades compartidas. Sólo estableciendo un compromiso ético, político y social entre ciudadanía y autoridades será posible avanzar hacia un México más justo, pacífico y solidario.

Escenarios de la investigación

La violencia social y, por ende, la escolar en México varían considerablemente entre regiones y afectan tanto la vida de los habitantes como su percepción de seguridad. A continuación se presenta un análisis somero de la situación de violencia en los estados de Aguascalientes, Morelos y Chiapas, enfocado en las ciudades de Aguascalientes, Cuautla, Jiutepec y San Cristóbal de las Casas. A partir de datos oficiales y encuestas nacionales, se exponen los principales desafíos en términos de incidencia delictiva y violencia en entornos escolares. Se busca analizar en profundidad las dinámicas de

Figura 1.2. *Prevención y erradicación de la violencia*

Fuente: elaboración propia.

violencia en las escuelas de dichos estados y su impacto en las comunidades educativas.

Aguascalientes

Aguascalientes ha tenido un aumento considerable en la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad en los últimos años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el 50.8% de la población considera que la seguridad en el estado ha disminuido, lo que representa un aumento del 2.2% con respecto al 2023. No obstante, la tasa de delitos por cada 100 000 habitantes en Aguascalientes alcanzó los 45 262, lo que significa un incremento del 72.1% en

comparación con el año anterior y constituye una de las cifras más altas en la región centro del país.⁹ Por su parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del 2024 revela que, en la capital del estado, el 61.0% de los ciudadanos se sienten inseguros al transitar por áreas públicas.¹⁰ En cuanto a las conductas antisociales, se identifica que el consumo de drogas afecta al 59.8% de los habitantes, muestra que el consumo de alcohol en espacios públicos es reportado por el 59.2%, ambos factores contribuyen a la percepción negativa sobre la seguridad.¹¹

Ahora bien, la violencia en entornos escolares en Aguascalientes afecta de manera significativa a las mujeres. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 35.2% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado algún tipo de violencia en la escuela, de los cuales 21.2% se relaciona con agresiones de índole sexual.¹² En 2022, la entidad reportó 283 hospitalizaciones de menores de entre 1 y 17 años debido a agresiones físicas, lo cual evidencia la grave situación de violencia en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes en sus entornos de convivencia, incluidas las escuelas.¹³

Morelos

Morelos es una de las entidades con mayor percepción de inseguridad en el país, con un 90.1% según la ENVIPE del 2024, lo que representa un incremento del 3.6% con respecto al año anterior.¹⁴ Este sentimiento de inseguridad está vinculado a las elevadas tasas de homicidios dolosos y otros delitos violentos en ciudades como Cuautla y Jiutepec. La incidencia de homicidios en el estado supera el promedio nacional, situándose como una

⁹ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2024. Resultados nacionales, 2024.

¹⁰ Observatorio Nacional Ciudadano, *Reporte sobre delitos de alto impacto*,. Observatorio Nacional Ciudadano, abril-junio 2024.

¹¹ Idem.

¹² INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Resultados nacionales, 2021.

¹³ Derechos de la Infancia, "Infancia y Adolescencia en Aguascalientes", Blog Derechos Infancia, junio 2023.

¹⁴ INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre. *op. cit.*

de las más altas en México.¹⁵ La ENVIPE también indica que el 66.5% de los habitantes reporta disparos frecuentes y el 71.9% observa consumo de alcohol en las calles, lo cual agrava la percepción de inseguridad y afecta la calidad de vida.¹⁶

Además, la ENVIPE 2024 indica una tasa de prevalencia delictiva cercana a los 27 000 hombres y 24 870 mujeres por cada 100 000 habitantes, con lo que Morelos se sitúa entre los estados con mayor incidencia delictiva. En añadidura, según el Índice Global de Paz 2024, es uno de los más violentos, con una tasa de 72.5 homicidios por cada 100 000 habitantes.¹⁷

En el ámbito escolar, la violencia también afecta a una proporción considerable de estudiantes en Morelos. Según la ENDIREH 2021, el 31.0% de las mujeres ha sufrido violencia en el contexto escolar, con un predominio de violencia psicológica y física.¹⁸ Los altos niveles de violencia estructural en el estado influyen en la percepción de seguridad en las escuelas, donde los incidentes de intimidación y acoso son recurrentes. Este entorno pone en riesgo la integridad física y emocional de los estudiantes y evidencia la necesidad de implementar programas de prevención y protección en las instituciones educativas.

Chiapas

En el caso de Chiapas, aunque registra una menor incidencia de delitos en comparación con otras entidades, enfrenta desafíos en áreas específicas, especialmente en zonas rurales y fronterizas. La ENVIPE 2024 indica que la tasa de delitos por cada 100 000 habitantes es de 16 038 —una de las más bajas del país—;¹⁹ sin embargo, el 24.2% de la población reporta sentirse

¹⁵ Observatorio Nacional Ciudadano, Observatorio Nacional Ciudadano, Observatorio Interactivo de Incidencia Delictiva. Seguridad, Justicia y Legalidad, 2024.

¹⁶ Idem.

¹⁷ Instituto para la Economía y la Paz, *Índice de Paz México 2024: identificación y medición de los factores que impulsan la paz*, Sidney, <http://visionofhumanity.org/resources>, consultado en mayo de 2024.

¹⁸ INEGI, *Encuesta Nacional sobre la Dinámica...* op.cit.

¹⁹ Observatorio Nacional Ciudadano, “Tasa de delitos en Chiapas”, 2024.

insegura, especialmente en áreas de alta incidencia de conflictos armados y tráfico ilegal cerca de la frontera con Guatemala.²⁰

En ciertas regiones de Chiapas, la violencia ha ocasionado el cierre de escuelas, afectando el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes.²¹ No obstante, según la ENDIREH 2021, la violencia en el contexto escolar presenta una tasa menor que en otros estados, pues el 20.2% de las mujeres reportan haber experimentado algún tipo de violencia escolar.²² Por otro lado, un estudio de 2020 encontró que el 77.01% de los estudiantes ha sido víctima de algún tipo de violencia, lo cual afecta su concentración, autoestima y rendimiento académico.²³ Además, en regiones vulnerables, los desafíos para el sistema educativo son mayores, ya que esta violencia se entrelaza con problemáticas sociales complejas.

La violencia en los entornos escolares de Aguascalientes, Morelos y Chiapas tiene dimensiones diferenciadas, pero igual de alarmantes; mientras en Aguascalientes son distintas por la prevalencia de agresiones sexuales y físicas que afectan principalmente a mujeres adolescentes; Morelos refleja un entorno sistemáticamente hostil, con alta incidencia de acoso y violencia psicológica; y Chiapas presenta una violencia más dispersa, arraigada en condiciones estructurales de marginación rural. En todos los casos, las consecuencias educativas, emocionales y sociales son profundas: desde hospitalizaciones por agresiones hasta cierres de escuelas y deserción estudiantil. La diversidad de manifestaciones subraya la necesidad de desarrollar estrategias diferenciadas para cada estado que combinen la prevención con la protección y reconstrucción del tejido escolar.

Con base en los datos analizados, los estados de Aguascalientes, Morelos y Chiapas enfrentan problemáticas específicas en cuanto a la violencia social y escolar; mientras Morelos se distingue por una alta incidencia de delitos violentos y una percepción extrema de inseguridad, Aguascalientes y Chiapas revelan formas menos visibles, pero igual de graves de violencia

²⁰ Observatorio Nacional Ciudadano, *Reporte sobre delitos de alto impacto*, Observatorio Nacional Ciudadano, abril-junio 2024.

²¹ El País, "Violencia en Chiapas deja a miles de niños sin clases", *El País*, septiembre 2023.

²² INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica... op. cit.

²³ Chiapas Paralelo, "Impacto de la violencia en la población escolar en Chiapas", *Chiapas Paralelo*, México, 2020.

Tabla 1.1. *Manifestaciones de violencia en contextos escolares por entidad (2021-2024)*

<i>Estado</i>	<i>Tipo de violencia escolar</i>	<i>Víctimas más frecuentes</i>	<i>Datos clave</i>	<i>Consecuencias observadas</i>
Aguascalientes	Agresiones físicas, verbales y sexuales	Mujeres adolescentes	El 35.2% de mujeres de ≥ 15 años reporta violencia en escuelas, de los cuales el 32.3% ocurrió en los últimos 12 meses	283 hospitalizaciones por violencia física en menores (2022)
Morelos	Violencia psicológica, física, acoso y amenazas	Mujeres estudiantes de zonas urbanas	El 31.0% de las mujeres han reportado violencia escolar	Clima escolar hostil e intimidación recurrente
Chiapas	Violencia física, verbal y simbólica, especialmente en la rural	Niñas y adolescentes	20.2% de las mujeres reportan violencia escolar; 77% del alumnado ha sufrido violencia	Cierre de escuelas en zonas conflictivas, reducción del rendimiento académico y baja autoestima.

Fuente: elaboración propia.

escolar y comunitaria. Estas diferencias evidencian la urgencia de implementar políticas públicas diferenciadas, con enfoque territorial, que respondan a las particularidades sociales, culturales y económicas de cada región.

La información recabada muestra que la violencia en las escuelas no es homogénea, pues Aguascalientes tiene una alta tasa de agresiones sexuales, mientras que en Chiapas predomina la violencia contextualizada en zonas vulnerables y en Morelos se tienen niveles alarmantes de acoso y un clima de hostilidad permanente.

Así pues, considerando el complejo panorama de violencia estructural y sus efectos sobre la juventud y el sistema educativo, el presente libro colectivo busca contribuir al análisis de las violencias escolares desde una mirada situada. Para ello, se llevó a cabo un estudio empírico en planteles de educación media superior ubicados en tres entidades federativas: Morelos, Aguascalientes y Chiapas. A continuación, se detalla la metodología empleada en esta investigación, que constituye el punto de partida para los capítulos siguientes.

Metodología de la investigación en contextos escolares marcados por la violencia estructural

Considerando el contexto de violencia estructural que atraviesa los entornos escolares en México, esta investigación se planteó como un ejercicio situado: busca comprender cómo estas formas de violencia son vividas, percibidas y afrontadas dentro de las escuelas. Se optó por un enfoque que articula el análisis empírico con la complejidad del entramado social, político e institucional que condiciona la experiencia estudiantil, especialmente en territorios atravesados por la inseguridad, la desigualdad y la impunidad. Este enfoque sitúa a la escuela no solo como escenario de manifestación de violencias, sino como espacio donde se reproducen y naturalizan, lo que requiere una comprensión profunda de sus niveles estructural, simbólico e interpersonal.

El proyecto fue coordinado por la Red de Investigación Educativa del CBTis No. 76 de Cuautla, Morelos. Este equipo interinstitucional, integrado por docentes del subsistema DGETI, investigadoras de universidades públicas estatales y estudiantes de posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, diseñó un estudio basado en las perspectivas del estudiantado sobre las violencias presentes en sus entornos educativos, así como sobre sus causas estructurales y efectos sociales.

Para ello, se seleccionaron cinco planteles de educación media superior ubicados en tres entidades federativas: Morelos, Aguascalientes y Chiapas. En total, estas instituciones albergan una población escolar de 8 839 estudiantes (tabla 1.2). Durante 2023, se aplicó un cuestionario digital titulado “Violencias escolares en el bachillerato”, a 4 623 estudiantes (52.3% de la población total). Además, se realizaron 50 entrevistas semiestructuradas a estudiantes y directivos entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Los planteles fueron elegidos tanto por su diversidad geográfica y sociocultural como por su relevancia en el análisis regional de las violencias escolares.

Tabla 1.2. *Población estudiantil en cada uno de los cinco planteles bajo estudio*

<i>Plantel o Unidad Académica</i>	<i>Localidad y entidad federativa donde se ubica</i>	<i>Población total de estudiantes</i>	<i>Estudiantes que contestaron el cuestionario</i>
CBTis No. 76	Cuautla, Morelos	2 475	1 393
CETis No. 12	Jiutepec, Morelos	1 700	698
CBTis No. 168	Aguascalientes, Aguascalientes	1 910	1 078
CECyT 20	San Cristóbal de las Casas, Chiapas	1 000	707
Escuela Preparatoria núm. 3 de la UAEM	Cuautla, Morelos	1 754	747
Total		8 839	4 623

Fuente: elaboración propia.

Diseño metodológico

El estudio se desarrolló a partir de un enfoque mixto, de alcance explicativo y no experimental, con una orientación crítica que asume que la violencia escolar es una manifestación localizada de violencias estructurales más amplias. La primera etapa consistió en un diagnóstico cuantitativo, mediante la aplicación de un cuestionario de 89 preguntas distribuidas en siete ejes temáticos, con el objetivo de identificar la presencia y los tipos de violencia en los planteles. En la segunda etapa, se realizó un análisis cualitativo, sustentado en entrevistas semiestructuradas, que permitió profundizar en las dinámicas de poder, conflictividad y formas de resistencia al interior de las escuelas y en sus entornos inmediatos.

Esta distinción metodológica permitió comprender la escuela no solo como un reflejo de las tensiones sociales, sino también como un espacio en el que estas violencias pueden reproducirse, resignificarse o incluso originarse. Desde esta perspectiva, al comparar las percepciones recogidas en el cuestionario con los relatos de directivos y personal escolar, emergieron dinámicas de poder, formas de evasión institucional y prácticas diferenciales de atención a la violencia, lo que aporta una lectura situada de los imaginarios y lógicas de intervención escolar.

El cuestionario incluyó 89 preguntas —abiertas, dicotómicas, de opción múltiple y escala Likert— y abarcó los siguientes ejes temáticos: (a) nociones

y percepción de la violencia en los y las jóvenes; (b) violencia entre estudiantes; (c) violencia de docentes a estudiante; (d) violencia de estudiantes a docentes; (e) violencia de trabajadores administrativos a estudiantes (y viceversa); (f) violencia en el ámbito familiar; y (g) estrategias institucionales para contener, contrarrestar, denunciar y sancionar prácticas violentas en el entorno escolar.

Aunque inicialmente el foco estuvo en las percepciones del estudiantado, durante el análisis emergió la necesidad de atender también las voces de los docentes, del personal administrativo y de los directivos. Integrarlas permitió enriquecer el entendimiento de las relaciones de poder y las narrativas de resistencia y resignificación que configuran la vida escolar.

Se trabajó con un muestreo por conveniencia, de carácter no probabilístico, propio de estudios situados. Esto implica que los resultados no buscan ser generalizables al conjunto de planteles de educación media superior en México. No obstante, la densidad de la información recolectada, su anclaje territorial y el enfoque cualitativo-inductivo adoptado, permiten obtener hallazgos sustantivos para comprender cómo se manifiestan, resisten y naturalizan las violencias en contextos escolares concretos, así como sus conexiones con procesos estructurales más amplios.

La investigación se inscribe en un enfoque sociológico, desde la sociología de la educación, el cual permite problematizar el papel de la escuela y la familia no solo como escenarios de socialización, sino también como espacios en los que se producen y reproducen las violencias estructurales. Este enfoque posibilita una lectura más amplia del fenómeno, puesto que integra a los actores escolares —estudiantes, docentes, personal administrativo y directivos— y los sitúa en su contexto territorial y sociohistórico.

Bajo esta perspectiva, tanto la escuela como la familia son concebidas como instituciones sociales atravesadas por relaciones de poder, dinámicas simbólicas y estructuras de desigualdad que inciden directamente en la experiencia cotidiana de las y los actores escolares. La metodología empleada se diseñó para captar estas complejidades, integrando dimensiones institucionales, subjetivas y contextuales. A partir de este marco, el diseño del libro se organizó conforme a los siete ejes temáticos que conforman el cuestio-

nario aplicado, lo cual favorece una lectura articulada entre las dimensiones empíricas y teóricas de la violencia en la escuela.

Este enfoque metodológico, al incorporar las múltiples voces y dimensiones del fenómeno, permite visibilizar cómo la violencia estructural se expresa en los espacios escolares y cómo es vivida por quienes los habitan. La violencia estructural que atraviesa a la sociedad mexicana ha configurado un entorno particularmente adverso para las juventudes, cuyas vidas se ven marcadas por la inseguridad, la impunidad y la precariedad. Esta situación no es ajena a las escuelas; por el contrario, estas se convierten en escenarios donde confluyen, se expresan y, en ocasiones, se reproducen las violencias sociales más amplias.

Consideraciones éticas

En términos éticos y metodológicos, el equipo de investigación elaboró oficios dirigidos a los directores de cada uno de los planteles participantes, en los cuales se presentó el objetivo general del proyecto y se solicitó formalmente su colaboración para la aplicación de los instrumentos. Antes de iniciar las entrevistas, se dio una explicación verbal a cada participante para obtener su consentimiento informado, el cual quedó registrado en los audios como parte del resguardo ético del proceso. A los estudiantes se les solicitó que eligieran un seudónimo para proteger su identidad y garantizar la confidencialidad de sus respuestas.

Las entrevistas fueron transcritas cuidadosamente, omitiendo cualquier dato que pudiera permitir la identificación de las personas participantes. Esta información quedó bajo resguardo del equipo responsable del estudio. Asimismo, en la aplicación del cuestionario se informó a los estudiantes sobre los fines de la investigación y se les aseguró la confidencialidad de sus respuestas, cumpliendo así con los principios éticos de protección de datos personales.

Ahora bien, comprender la violencia escolar exige, ir más allá del análisis de los conflictos entre pares o del desempeño institucional; implica situarla en el marco de los procesos históricos, políticos y económicos que han debilitado el tejido social, erosionado la confianza ciudadana y precarizado las condiciones de vida en amplios sectores del país.

Este capítulo ofrece una mirada contextual que permite comprender las condiciones estructurales que subyacen a las violencias escolares, al tiempo que presenta el diseño metodológico. Desde este encuadre, los capítulos siguientes profundizarán en las formas concretas que asumen las violencias en los espacios escolares, así como las respuestas —formales e informales— que emergen desde las comunidades educativas.

Reconocer la violencia escolar como una expresión de la violencia estructural que atraviesa a las juventudes mexicanas permite desplazar la mirada desde el síntoma hacia las raíces del problema. Más allá de respuestas simplistas o meramente punitivas, este capítulo propone una comprensión situada de las violencias, que tome en cuenta las condiciones sociales, económicas y territoriales en las que se inscribe la vida cotidiana del estudiantado. Al visibilizar tanto las manifestaciones de la violencia como las formas de resistencia que emergen en las escuelas, se abre la posibilidad de imaginar respuestas más justas, integrales y transformadoras. Este es el punto de partida para los capítulos siguientes, que examinan en mayor detalle las experiencias, percepciones y propuestas que, desde los propios actores escolares, contribuyen a la construcción de entornos educativos más seguros, inclusivos y democráticos.